

Introducción

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

El análisis del ejercicio de la Audiencia de Puerto Rico durante los primeros treinta años de su existencia (1831-1861) provee una forma muy efectiva de observar la personalidad puertorriqueña en su etapa inicial de desarrollo. De igual forma, el sistema de justicia de la isla se puede utilizar como un espejo histórico, político, económico y social en un momento crítico en la vida del territorio y su relación con la metrópoli. Los autos acordados y las decisiones de los oidores y oficiales encargados de los asuntos legales ayudan a entender los frecuentes choques entre los distintos poderes y los muchos cambios introducidos en esta época, donde se comienza a definir un ente jurídico y político netamente puertorriqueño, en proceso de maduración.

Los acontecimientos políticos que ocurren simultáneamente en Tierra Firme americana y en la Península desde principios del siglo XIX, se reflejan indudablemente en la política gubernamental impuesta sobre la sociedad puertorriqueña, y el sistema judicial insular, a su vez, responde a estos impulsos extramuros. En este sentido contrastan marcadamente las luchas independentistas americanas y las rebeliones antillanas recientemente desatadas con el baluarte, supuestamente pacífico y leal, del archipiélago caribeño originalmente conocido como San Juan Bautista. Este territorio isleño despunta ahora como la esperanza de la monarquía, no sólo en términos de mantener el poderío sobre las últimas tierras antillanas que aún le pertenecen, sino además como posible base de una operación táctica para iniciar el sueño de la reconquista de los territorios americanos recientemente perdidos.

Así es como el sistema de derecho puertorriqueño y las instituciones de justicia instauradas en etapas de ebullición reformista se convierten en instrumentos esenciales de una política más bien centralista y autoritaria de

la monarquía. Esto, ligado al sistema económico de tipo esclavista-hacendístico que se desarrolla en gran parte del territorio, mantiene continuamente ocupado al ramo judicial. De los nuevos órganos judiciales y administrativos y de sus oficiales se espera que sirvan con lealtad absoluta a la monarquía, a la vez que se utilizan para estimular el desarrollo económico, asegurar el bienestar de los habitantes y, sobre todo, para mantener el control del territorio y garantizar la seguridad pública interna.

Por estas razones la jurisprudencia audiencial y los oficios emitidos por los oidores, cuando éstos actúen como parte del Acuerdo Real, resultan muy pertinentes. Jueces y consejeros son, además de cómplices en este drama político criollo, un eco auténtico de las contradicciones y del gran flujo (y reflujo) de la política de gobierno peninsular que se desarrolla e implementa en las colonias durante la primera mitad del siglo XIX. Estos letrados de prestigio, muchos de ellos reubicados desde posiciones judiciales dejadas cesantes en Tierra Firme o por traslado desde Cuba, terminan en un nuevo ambiente antillano, dominado por la figura omnipotente del presidente audiencial y capitán general, con poderes hacendísticos y el patronazgo religioso por añadidura.

La institución audiencial, que también incluye las funciones consejeras del Acuerdo, se inauguran en la isla luego de haber existido por varios siglos en América, con el propósito de adelantar y proteger los intereses de la monarquía. Los oidores designados como parte de esta maquinaria judicial y gubernamental americana asumen un grado de competencia que en muchos casos sobrepasa sus orígenes peninsulares. Esta expansión de facultades se podía explicar desde las necesidades particulares de estos distritos alejados e incomunicados, que resultaban difíciles de manejar desde los centros de poder metropolitanos, aún con el auxilio de las instituciones gubernamentales y judiciales tradicionales.

Aunque se ha reportado que la instalación de la Audiencia puertorriqueña en 1832 fue bien recibida entre algunos grupos y que creó expectativa reformista entre los habitantes, dicha ilusión terminó en ocasiones seriamente frustrada. Sin embargo, no es menos cierto que la labor desplegada por los oidores resultó en una especie de contrapeso saludable a los poderes hasta ahora casi ilimitados y extraordinarios (omnímodos) de los capitanes generales. A la vez, su labor decepciona, cuando sus actuaciones entorpecen las reformas y retrasan la modernización que requerían a gritos el aparato de gobierno y la maquinaria judicial.

Se entiende comúnmente que la justicia en Puerto Rico hasta el momento en que comienza a operar la Audiencia, había estado mayormente regida por la figura del capitán general, auxiliado por oficiales subalternos. Entre estos destacan los asesores o tenientes letrados, los justicias mayores, los tenientes a guerra, los sargentos urbanos y los alcaldes, en los distintos momentos en que estos puestos existieron. También las reformas judiciales que ocurren paralelas a la implementación del sistema audiencial están relacionadas con la introducción de la institución de la intendencia y con la separación de la Contaduría y Hacienda Pública puertorriqueña de la cubana. Con estos cambios se comienza la actualización de la burocracia gubernamental en este territorio. A su vez, estas mejoras introducidas en épocas cercanas contribuyeron a la separación de funciones entre Ejecutivo, Hacienda, Guerra y Justicia. De forma que esta doctrina de administración considerada como fundamental para la renovación del ramo judicial desde los orígenes de la constitución gaditana de 1812, varias décadas más tarde comienza a retoñar en esta dependencia.

La instalación de un tribunal apelativo separado para Puerto Rico se venía discutiendo seriamente desde principios del siglo XIX como una medida necesaria para enfrentar el incremento poblacional, sustentar el desarrollo económico que se quería estimular por parte de las autoridades y ayudar a mantener el control sobre las últimas dependencias en Indias. Esta situación finalmente obligó a la monarquía a optar por la creación de una institución de tipo tradicional audiencial, aunque de menor rango y jerarquía que sus precursoras establecidas desde antes en Santo Domingo, Tierra Firme y en Cuba.

Sin embargo, no debe entenderse por esto que la última de las audiencias americanas en crearse no fuese sumamente importante para la metrópoli, ya que aquello de que carecía en composición y prestigio le sobraba en cuanto a la lealtad y laboriosidad de sus oidores. Esto se desprende claramente de un análisis de los autos acordados y la vasta jurisprudencia audiencial. Además, este tribunal, que algunos han catalogado en Indias como de justicia y administración mixto, se inauguró en este territorio con la ventaja de tener un cúmulo de años de tradición y, la veteranía de más de tres siglos de existencia institucional en América.

En términos de metodología, podemos decir que la labor de los oidores merece estudiarse no sólo basándose en de las decisiones emitidas en los casos y pleitos particulares (donde la institución actuó principalmente

en primera o segunda instancia), sino también revisando los autos acordados emitidos por los oidores, cuando estos funcionan colegiadamente como una especie de consejo de gobierno isleño. En esta encomienda, el radio de acción de los magistrados fue amplísimo, llegando a adentrarse en asuntos muy diversos de gobierno, reglamentación administrativa y hacienda pública. Igualmente se distinguen los muchos autos y oficios expedidos en materias de seguridad, paz pública y criminalidad (castigos, penas y cárceles), fiscalización del ejecutivo (visitas y residencias), administración judicial (sobreseimientos, traslados y corrupción) y hasta compartiendo jurisdicción en asuntos religiosos (privilegio del Sagrado).

Además, la labor quasi legislativa del Acuerdo se desprende de las distintas circulares, oficios y consultas que emanan durante el periodo de estudio (1831-1861). En este sentido, se distingue especialmente su participación en el campo penal y correccional, que cobra gran relevancia debido al vacío legal casi completo, causado por la falta en la isla de códigos y procedimientos uniformes, durante la primera mitad del siglo XIX.

II. EL PERIODO DE TIEMPO SELECCIONADO

Las tres décadas escogidas para esta investigación (1831-1861) coinciden con el periodo del siglo durante el cual existió el Acuerdo como parte integral de la Audiencia. Luego, este apéndice dejó de existir y se desvincularon las funciones judiciales de los oidores de aquellas labores de consejo al Ejecutivo.

Así es que en 1861 el Acuerdo se sustituye por el órgano de nueva creación llamado el Consejo de Gobierno de Puerto Rico, integrado éste por seis miembros nombrados por el gobernador, el obispo, el regente de la Audiencia, el intendente, el fiscal y otros dieciséis consejeros selectos por la monarquía. Desde el mismo momento en que desaparece la labor de asesoramiento de los oidores asume el regente la presidencia de la Audiencia, función que le había sido negada a este oficial desde que se inaugurara el tribunal audiencial de Puerto Rico en 1832. Esto fue así, aun cuando resultaba tal exclusión opuesta a la práctica prevaleciente en las demás audiencias indianas, que desde 1776 tenían la presidencia exclusivamente en manos del regente. Finalmente, al implementarse estos últimos cambios en 1861, el primer ejecutivo se separa de la función presidencial conjunta (jus-

ticia y gobierno) que había ejercido sin interrupción durante los anteriores treinta años.

Además, hemos seleccionado estos tres decenios específicos (1831-1861) con el propósito de examinar con rigor el impacto sobre la sociedad que tuvo la gran conglomeración de funciones (justicia, consejo y gobierno) en manos de un mismo grupo de oidores independientes y profesionales. Situación que se complicaba, al estar dichos oficiales dirigidos por un primer ejecutivo gobernador-presidente (no letrado) y obligados a participar en esta encomienda de forma colectiva, y sujetos en cuanto a sus decisiones a una serie de normas legales confusas y desarticuladas.

La huella social que dejó la jurisprudencia establecida por estos oidores y el producto final engendrado por este órgano judicial complejo y mixto son parte indispensable de este análisis histórico-jurídico y social. A la vez, se trata de comparar constantemente el impacto que tuvieron las muchas vacilaciones políticas y constitucionales (peninsulares e indianas) en la jurisprudencia audiential.

III. EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

Aunque las audiencias que existieron en distintas épocas en la península y en Tierra Firme americana han sido estudiadas con bastante rigor, el tema no ha sido tratado con igual profundidad en cuanto a las Antillas. En lo referente al más reciente distrito audiential americano (Puerto Rico), sólo puede contarse con unos pocos artículos sobre el origen y establecimiento de este tribunal y con una monografía explicando el traspaso de jurisdicción de la Audiencia de Santo Domingo a Puerto Príncipe (Cuba), ocurrido en 1800.

Estos estudios sobre los tribunales apelativos antillanos no analizan la labor de la institución audiencia-acuerdo, ni discuten la figura del presidente-gobernador ni contemplan el detalle sobre la función anómala de los oidores y jueces cuando estos actúan como una especie de consejo de gobierno. Sino que más bien se limitan a tratar los hechos relacionados con el proceso de creación de la institución, la ceremonia de inauguración, la selección de los oidores y la extensión de su jurisdicción y competencia.

Particularmente en el caso de Puerto Rico, queda rezagado el análisis comparativo del impacto de la institución, a largo alcance, sobre la socie-

dad, tarea que constituye uno de los enfoques principales de nuestra investigación sobre dicho distrito. Lo anterior explica la relevancia que tiene el estudio de la Audiencia como parte del engranaje total administrativo-gubernamental y la necesidad que existe de medir su impacto sobre la sociedad isleña. Además es pertinente dicho análisis por el hecho de que el sistema de administración gubernamental de la dependencia no contenía, en esta época, una clara separación de poderes. Contrariamente, se adopta un modelo de fiscalización que depende en gran parte de multiplicar y sobreponer funciones en los mismos oficiales; descansando paralelamente en los juicios de residencias, las visitas, las comisiones especiales y el deber de informar como método para fijar responsabilidades a los funcionarios y garantizar la eficiencia administrativa deseada.

Además, el sistema judicial se nutre y depende principalmente del cuerpo de derecho positivo y procesal indiano. Esto de por sí crea otras dificultades, por tratarse de una estructura especial, *ad hoc* y desarticulada, mayormente conteniendo derecho público y supletoriamente apoyado por el cúmulo de leyes castellanas, especialmente en la esfera de lo privado.

Así es que, dentro de este *mare nostrum* legal y criollo-antillano, los oidores, dirigidos oficialmente por su presidente de “capa y espada”, están obligados a navegar con gran habilidad y cuidado. A veces parecen inclinarse a favor de los reclamos de individuos afectados por las órdenes de las autoridades locales y en otras ocasiones imponen el poder inmenso de la monarquía en contra de los intereses privados afectados.

Como muy bien apunta García-Gallo en su monografía fundamental sobre las audiencias americanas, estos tribunales no sólo se reconocen como los órganos básicos de gobierno y de la administración judicial de los territorios indianos, sino que también fueron elementos decisivos en la definición de las distintas nacionalidades americanas, que se forman a principios del siglo XIX.¹

A la vez que alerta sobre la falta de un estudio absoluto sobre la audiencia indiana, García-Gallo también reconoce el gran valor de los esfuerzos originales sobre el tema ejecutados por Solórzano,² Ruiz

1 García-Gallo, Alfonso: *Los orígenes españoles de las instituciones americanas, Las audiencias en Indias, su origen y caracteres*, Madrid, 1987, págs. 889-951. Primera edición en Congreso Venezolano de Historia I, Caracas, 1975, págs. 361-432.

2 Solórzano Pereira, Juan de: *De Indiarum iure, sive de iusta Indiarum Occidentalium gubernatione II*, Madrid, 1639, libro 4, caps. 3-8; y *Política Indiana*, Madrid, 1647, libro 5, caps. 3-9.

Guiñazú³ y Schafer.⁴ Asimismo, destaca otras investigaciones que han surgido como secuela de las anteriores.⁵ Además, este gran forjador del estudio del derecho indiano propio, enumera otras obras generales sobre las instituciones americanas que incluyen algún análisis de estos tribunales, como parte de su cobertura más amplia sobre la historia de las leyes autóctonas americanas.⁶

Entre los distritos judiciales antillanos (Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico) estudiados menos cuidadosamente que los de Tierra Firme, se podría exceptuar la Audiencia de Santo Domingo. Este órgano, que existió desde el comienzo mismo de la colonización, ha sido discutido en varias obras generales y, específicamente, en el texto de Javier Malagón Barceló dedicado enteramente a la audiencia dominicana y por Alberto García

3 Ruiz Guiñazú, E.: *La magistratura indiana*, Buenos Aires, 1916.

4 Schafer, Ernesto: *El consejo supremo y real de las Indias II*, Sevilla, 1947, págs. 66-156 y 443-524.

5 Entre estos se menciona principalmente a: Pelsmaeker e Ibáñez, Francisco: "La Audiencia en las colonias españolas de América", *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, Facultad de Derecho de Madrid, tomo 8, 1925, págs. 291-304; 383-423 y 466-506; Aznar, L.: "Evolución del régimen legal y del significado político de las audiencias indianas", *Boletín de la Universidad de la Plata*, 17, 1933; Ballesteros, P.: "La función política de las reales chancillerías coloniales", *Revista de Estudios Políticos* VI, núm. 26, Madrid, 1946; Polanco Alcántara, Tomás: "Las audiencias y chancillerías reales de Indias", *Revista de Derecho de la Universidad Central de Venezuela* III, núms. 9-10, 1949, págs. 1-57; y por el mismo autor *Las Reales Audiencias en las provincias de España*, Madrid, 1992; Márquez Guerrero, E.: *La magistratura española en la conquista de América*, Alicante, 1951; Miguel y Alonso, C.: "Las audiencias de los reinos y señoríos de las Indias", *Cuadernos Hispanoamericanos*, núms. 116-117, 1959; Salvat Monguillot, M.: "Las funciones del gobierno de la audiencia en el reino de Chile", *Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, 17-23 de enero, Actas y Estudios, Madrid, 1973. Además debe destacarse, sobre las funciones diversas de las audiencias en América, de Muro Romero, Fernando: *Las presidencias gobernaciones en Indias (Siglo XVI)*, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1975.

6 García-Gallo también cita algunos textos generales sobre el tema de las instituciones en Indias que hablan en general sobre la investigación de las audiencias: Levene, R.: *Introducción a la Historia del Derecho Indiano*, Buenos Aires, 1924, págs. 121-39 (reimpresión en las *Obras*, por Academia Nacional de Historia III, 5-265); Esquivel Obregón, T.: *Apuntes para la historia del derecho en Méjico* II, Méjico, 1938, págs. 298-361; Ots Capdequí, José María: *Manual de historia del derecho español en las Indias y del derecho propiamente indiano*, Buenos Aires, 1945, págs. 75-76 y 355-59; Haring, Clarence Henry: *The Spanish Empire in America*, Nueva York, 1947; *El imperio español en América*, trad. de M. Pérez Silva; Zorraquín Becú, R.: *Historia del derecho argentino* I, Buenos Aires, 1966, 145; Tau, V. y Martire, E.: *Manual de historia de las instituciones argentinas*, Buenos Aires, 1967, págs. 110-13; 187-89; Font Rius, J.M.: *Audiencias indianas, diccionario de historia de España*, dirigido por G. Bleiberg, Madrid, 1968, págs. 406-7; Muro Orejón, A.: *Audiencia en América*, en Gran Enciclopedia Rialp III, Madrid, 1971, págs. 351-54; Konetzke, R.: *América latina, la época colonial*, Madrid, 1971, págs. 122-25, en *Historia Universal siglo XXI*; y Margadant, G. Floris: *Introducción a la historia del derecho mexicano*, México, 1971, págs. 67-70.

Menéndez en *Los jueces de apelación de La Española*.⁷ De igual forma, se cuenta en las Antillas con las monografías de Fernando de Armas Medina sobre el traslado de la audiencia dominicana a Puerto Príncipe ocurrido en 1800⁸ y con la obra sobre Cuba de Leví Marrero, quien en su historia monumental económica y social de la Isla trata el tema de la justicia y de las Audiencias antillanas como parte de sus descripciones del sistema judicial en general.⁹

En cuanto a los pocos escritos sobre la Audiencia de Puerto Rico, se reducirían prácticamente al trabajo sobre el origen, fundación y competencia de este órgano apelativo realizado por el propio Fernando de Armas Medina, publicado originalmente en Sevilla en 1965, más tarde reproducido en la *Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico* y también por el Instituto de Cultura Puertorriqueña;¹⁰ al excelente estudio sobre la organización de la Audiencia territorial de Puerto Rico presentado ante el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Buenos Aires que llevó a cabo Luis González Vales en 1997,¹¹ en el que se incluye un recuento de la bibliografía muy escasa que existe sobre el tribunal en Puerto Rico; al artículo de Domingo Toledo Álamo, publicado en la *Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico*, en 1945;¹² y a un libro de Pablo Berga y Ponce de León originalmente publicado en 1939 sobre la historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que describe en su pri-

7 Malegón Barceló, Javier: *El distrito de la audiencia de Santo Domingo en los siglos XVI a XIX*, Santiago de los Caballeros, 1977. Sobre el tribunal apelativo ver: García Menéndez, Alberto: *Los jueces de apelación de la Española y su residencia*, Museo de las Casas Reales, Santo Domingo, 1981.

8 Armas Medina, Fernando de: "La audiencia de Puerto Príncipe (1775-1853)", *Anuario de Estudios Americanos*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, 1958, vol. XV, Art. 5, págs. 273-370; reproducido en: *Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña*, núm. 20, año VI, julio-septiembre, 1963. También relacionado al tema y del mismo autor: "La Audiencia de Canarias y las Audiencias en Indias", *Anales de la Universidad Hispalense*, vol. XXII, Sevilla, 1962.

9 Marrero, Leví: *Cuba: Economía y Sociedad 1510-1868* (15 volúmenes) Madrid, 1988; vol. 13, pág. 34, 83, 167, 168; vol. 14, págs. 5-37, 146, 154; y vol. 15, págs. 27, 178, 182, 184.

10 Armas Medina, Fernando de: "Fundación de la audiencia de Puerto Rico", *Anales de la Universidad Hispalense*, año XXVI, Sevilla, 1965-1; publicado también en *Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña*, San Juan, núm. 20, 1963, págs. 10-18 y en *Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico*, núm. 41, vol. 2, San Juan, 1980, págs. 291-304.

11 González Vales, Luis E.: "La real audiencia territorial de Puerto Rico - última audiencia americana", *XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1997.

12 Toledo Álamo, Domingo: "Creación de la real audiencia territorial de Puerto Rico", *Revista de Derecho, Legislación y Jurisprudencia del Colegio de Abogados de Puerto Rico*, San Juan, vol. VIII, núm. 1, enero-marzo 1945.

mer capítulo a la Audiencia Territorial como instrumento precursor del Tribunal Supremo de la isla.¹³

En especial, deben destacarse sobre el tema de la justicia y los tribunales de Puerto Rico las obras fundamentales e insignes sobre el derecho constitucional puertorriqueño del ex-presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, en las que se trata en forma general a la audiencia como parte del sistema de justicia de la dependencia en los siglos XVIII y XIX. Igualmente merecen mención los varios escritos publicados por el profesor Carmelo Delgado Cintrón sobre la administración de la justicia en Puerto Rico en el siglo XIX, donde se describe la creación de la Audiencia, su jurisdicción, composición y funciones. Además, sobre la audiencia local, se encuentran varios artículos periodísticos de Federico Acosta Velarde que discuten el origen del Tribunal Supremo de Puerto Rico, luego publicados como libro en 1940 y, otras monografías de la prensa local sobre el tema que deben tomarse en consideración.¹⁴

Para una explicación y trasfondo de la justicia puertorriqueña y sus oficiales en los siglos anteriores a la Audiencia, resulta muy instructivo el estudio de José Julián Acosta y Calvo en 1866, en el que este puerto-

13 Berga y Ponce de León, Pablo: *Vida Histórica del Tribunal Supremo de Puerto Rico*, San Juan, 1939, capítulo primero, Audiencia Territorial de Puerto Rico.

14 Otras obras generales sobre la justicia y administración por investigadores locales que incluyen alguna discusión sobre la audiencia de Puerto Rico que deben mencionarse son: Trías Monge, José: *Historia constitucional de Puerto Rico*, (4 vols.) vol. I, 1980, vol. II, 1981, vol. III, 1982 y vol. IV, 1983; en vol. I, págs. 22-5; y por el mismo autor: el *Sistema judicial de Puerto Rico*, Río Piedras, 1988, págs. 22-44; y *El choque de dos culturas jurídicas en Puerto Rico*, San Juan, 1991, págs. 101-12; y "Observaciones sobre el Derecho Puertorriqueño del siglo XIX", *Revista Jurídica Universidad Interamericana de Puerto Rico*, vol. XV, 1981, págs. 357-366. De Delgado Cintrón, Carmelo: *Derecho y colonialismo*, Río Piedras, 1988, págs. 129-152; "Cuestiones Ideológicas del poder judicial", *47 Rev. Jur. Universidad de Puerto Rico*, 1-2, págs. 107-149, 1978; "Desarrollo Histórico del Tribunal Supremo de Puerto Rico" sesquicentenario de su fundación, 1832-1892, *Boletín Judicial de Puerto Rico*, 4, págs. 4-8, 1982; "La organización judicial de Puerto Rico, 1800-1898", *Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico*, vol. LI, 1982, págs. 381-402. Véase también Acosta Velarde, Federico: "El primer Tribunal Supremo de Puerto Rico", artículo en el *Periódico El Mundo*, 2 de octubre de 1938; Todd, Roberto H.: "La corte suprema de Puerto Rico", artículo *Periódico El Mundo*, 1938. Además: Hernández, Jorge Luis: "La administración judicial de Puerto Rico de los tenientes a guerra a la Real Audiencia territorial de Puerto Rico" (tesis inédita de maestría), Biblioteca, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, 1978; un manual de estudios de Fernos López-Cepero, Antonio: *Curso de historia de derecho puertorriqueño*, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Hato Rey, 1984 (copia en la Biblioteca, Tribunal Supremo de Puerto Rico); y la obra más reciente de Baralt, Guillermo A.: *Historia del Tribunal Federal en Puerto Rico, 1899-1999*, Hato Rey, 2004, que contiene en su primer capítulo un análisis sobre la justicia en el siglo XIX en Puerto Rico.

rriqueño anota la tercera edición de la *Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico* de Fray Íñigo Abbad y Lasierra. Aquí se completa una excelente explicación del sistema legal de Puerto Rico anterior al siglo XIX y también se discuten los cambios en la administración de justicia que auguran la inauguración audiencial.¹⁵

Otro antecedente que merece anotarse, es la *Historia de Puerto Rico (1600-1650)* de Enriqueta Vila Vilar, donde se trata el impacto que tiene la Audiencia de Santo Domingo y los choques que se ocasionan, en términos de las intromisiones de la institución dominicana en la labor de los habitantes y los oficiales gubernamentales de Puerto Rico, durante la época estudiada.¹⁶ Igualmente se destaca la obra de Ángel López Cantos, centrada en la última mitad del siglo XVII. López Cantos aquí maneja efectivamente los expedientes de la Real Audiencia de Santo Domingo en el apartado sobre Puerto Rico, utilizando como fuente documentación de justicia audiencial, especialmente sobre los juicios de residencia, los testamentos, los embargos judiciales y las actas y documentos notariales.¹⁷

El asunto relacionado de la política peninsular sobre la administración e instituciones de gobierno, justicia y hacienda de Puerto Rico en el siglo XIX queda cubierto en parte por Lalinde Abadía y, por otra parte, por García Ochoa.¹⁸

Por supuesto que cualquier introducción al tema de la institución audiencial americana y su historiografía resultaría incompleta si no se refiriera a la labor bibliográfica sobre la materia institucional y legal indianista que ha realizado por un número de años Santiago Gerardo Suárez.¹⁹ También resulta esencial la recopilación sobre el derecho indiano de Ismael

15 Acosta y Calvo, José Julián: notas a la tercera edición anotada de la *Historia Geográfica, civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico*, de Fray Íñigo Abbad y Lasierra, San Juan, 1866. Nueva edición con estudio introductorio por Gervasio L. García, Ed. Doce Calles, San Juan, 2002.

16 Vila Vilar, Enriqueta: *Historia de Puerto Rico 1600-1650*, Sevilla, 1974, págs. 63 y 71.

17 López Cantos, Ángel: *Historia de Puerto Rico 1650-1700*, Sevilla, 1975.

18 Lalinde Abadía, Jesús: *La administración española en el siglo XIX puertorriqueño*, EEHA, Sevilla, 1980; García Ochoa, María Asunción: *La política española en Puerto Rico durante el siglo XIX*, Río Piedras, 1982.

19 Suárez, Santiago Gerardo: "Para una bibliografía de las reales audiencias", *Memorias del Segundo Congreso Venezolano de la Historia 3*, Caracas, 1975, págs. 211-233; y por el mismo autor: "Las reales audiencias indianas: fuentes y bibliografía", Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1989.

Sánchez Bella, donde se explica, a propósito de las Audiencias, que estos órganos han sido analizados no sólo desde el punto de vista jurídico-histórico tradicional, sino también en su aspecto cuantitativo, histórico-social y administrativo. Los escritos de Burkholder-Chandler y los de Lohman Villena se mencionan como ejemplos de este tipo de investigación realizada con documentación sobre las visitas oficiales ordenadas por los monarcas y estadísticas sobre los oidores integrantes de las audiencias antes de la independencia de las regiones americanas.²⁰

Sobre el trato, ocupación y educación de esclavos en Puerto Rico, igual que sobre el tema de la “trata” y emancipación en las Antillas, existe una gran historiografía local comenzando por las obras fundamentales de Díaz Soler (*Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico*) y Cruz Monclova, quien también se ocupa de los esclavos con gran acierto en su *Historia de Puerto Rico*.²¹

Hemos utilizado además el libro del distinguido historiador peninsular, especializado en los asuntos de Puerto Rico, Ángel López Cantos, con la colaboración de su colega local, Sued Badillo, que titularon *Puerto Rico negro*.²²

La obra de Morales Carrión sobre el impacto de la trata de esclavos durante el siglo XIX, luego de firmarse el tratado aboliendo este mercado inhumano (1820), es otra fuente indispensable en este campo.²³ Resulta igualmente importante para nuestro estudio el aspecto jurídico de la esclavitud que introduce Lucena Salmoral en varias de sus publicaciones recién-

20 Sánchez Bella, Ismael: *Historiografía de las instituciones jurídicas indianas, derecho indiano estudios II*, Navarra, 1991, págs. 305-31. Sobre el método cuantitativo histórico aplicado a las audiencias, resaltan los trabajos medulares de Burkholder, Mark A. y Chandler, D.S.: *From impotence to authority, The Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1807*, Columbia and London, 1977 (versión española, México, 1984); y de los mismos autores: *Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821*, Westport, 1982; y de Burkholder, Mark A.: *Politics of Colonial Career: José Baquijano and the Audiencia of Lima*, Albuquerque, 1980. También en esta misma línea, deben examinarse: López Bohorquez, E.: *Los ministros de la audiencia de Caracas (1786-1810)*, Caracas, 1984; y Lohman Villena, G.: *Los ministros de las audiencias de Lima en el reinado de los Borbones*, Sevilla, 1974.

21 Díaz Soler, Luis Manuel: *Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico*, Madrid, 1953; Cruz Monclova, Lidio: *Historia de Puerto Rico, Siglo XIX*, Tomo I, Río Piedras, 1952; Tomo II, Río Piedras, 1957.

22 López Cantos, Ángel y Sued Badillo, Jalil: *Puerto Rico negro*, Río Piedras, 1986.

23 Morales Carrión, Arturo: *Auge y de decadencia de la trata negrera en Puerto Rico (1820-1860)*, San Juan, 1978; y del mismo autor “La abolición de la trata y las corrientes abolicionistas en Puerto Rico”, *Esclavitud y derechos humanos*, Madrid, CSIC, 1986, pág. 253.

tes; incluso *La esclavitud en América española* y los *Códigos negros de América española*.²⁴

Fue muy útil además el tratamiento dado a la lucha por la libertad del negro en el siglo XIX en el Coloquio Internacional sobre Abolición de la Esclavitud llevado a cabo en Madrid en 1986, editado por Francisco de Solano.²⁵

Los artículos publicados en 1986 en el *Anuario de Estudios Americanos*, dedicado enteramente al tema de la esclavitud, son también muy importantes.²⁶ Navarro García indaga en los conflictos constitucionales y su impacto sobre la esclavitud en Cuba y Scarano habla de haciendas y barracones en Ponce (1800-1850), investigaciones que resultaron muy acertadas para el capítulo que desarrollamos sobre la economía, el derecho y la esclavitud.²⁷

24 Lucena Salmoral, Manuel: *La esclavitud en América española*, Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Varsovia, 2002; y del mismo autor *Los códigos negros de la América española*, Universidad de Alcalá, 1996 (Ed. Unesco); “El Código Negro en Puerto Rico 1826”, *Boletín Academia de la Historia Puertorriqueña*, núms. 45-48, vol. XIV-XV, San Juan, 1993, págs. 83-119.

25 *Esclavitud y derechos humanos, la lucha por la libertad del negro en el siglo XIX*, Actas Coloquio Internacional sobre Abolición de la Esclavitud, Madrid, 2-4 de diciembre de 1986, coordinado y editado por Francisco de Solano y Agustín Guimerá, CSIC (Departamento de Historia de América).

26 *Anuario de Estudios Americanos*, vol. XLIII, Sevilla, 1986 (Tomo dedicado a la abolición de la esclavitud). También: Vila Vilar, Enriqueta: “La esclavitud americana en la política española del siglo XIX”, *AEA*, vol. XXXIV, 1977. Igualmente utilizamos: Scarano, Francisco A.: “Demografía y esclavitud: tendencias en Puerto Rico, 1820-1873”, *Revista de Historia*, núm. 4, San Juan, julio, 1986, págs. 79-101.

27 Navarro García, Jesús Raúl: *Entre esclavos y constituciones, el colonialismo liberal de 1837 en Cuba*, Sevilla, EEHA, 1991. Scarano, Francisco A.: *Haciendas y barracones: azúcar y esclavitud en Ponce Puerto Rico 1800-1850*, (original en idioma inglés: *Sugar and Slavery in Puerto Rico, the Plantation Economy of Ponce, 1800-1850*, University of Wisconsin, 1984), Río Piedras, 1993. Otros libros anteriores que tratan sobre la esclavitud (en todas sus facetas) y que merecen mencionarse son: Flinter, Jorge D.: *Examen del estado actual de los esclavos de la isla de Puerto Rico bajo el gobierno español*, Nueva York, 1832, publicado recientemente por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 1976. También se encuentra en el siglo XIX (Madrid, 1867): *El proyecto para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico*, preparado por Ruiz Belvis, Segundo; Acosta, José Julián; y Quiñones Mariano, Francisco, Editorial Edil, Río Piedras, 1978. Otras obras precursoras y meritorias sobre el tema esclavista puertorriqueño son: Blanco Tomás: *El prejuicio racial en Puerto Rico*, publicado originalmente en 1938 y por ediciones Huracán, Río Piedras, 1985, con estudio preliminar de Arcadio Díaz Quiñones; Coll & Toste, Cayetano: *Historia de la esclavitud en Puerto Rico*, Barcelona, 1969; Negrón Portillo, Mariano y Mayo Santana, Raúl: *La esclavitud urbana en San Juan*, Río Piedras, 1992; Nistal Moret, Benjamín: *Esclavos, prófugos y cimarrones, Puerto Rico 1770-1870*, San Juan, 1984; Álvarez Nazario, Manuel: *El elemento afronegroide en el español de Puerto Rico*, Barcelona, 1973 (especialmente su introducción en el capítulo primero, págs. 15-91); Mayo Santana, Raúl, Negrón Portillo, Mariano y Mayo López, Manuel: *Cadenas de esclavitud... y de solidaridad, esclavos y*

Por supuesto que no se puede estudiar el asunto de la servidumbre humana que se implantó como sistema social y económico en Puerto Rico sin nutrirse y compararse continuamente con la situación cubana. Para esto no sólo deben tenerse en cuenta los originales estudios sobre la materia en la tradición de Saco,²⁸ Moreno Fraginalls²⁹ y Cepero Bonilla,³⁰ quienes se reconocen como verdaderos pioneros en el estudio del sistema esclavista.³¹

También me sirvió de base para entender la relación del sistema de hacienda esclavista (siglo XIX) la historia económica de Cuba, 1760-1840, de Pablo Tornero Tinajero,³² quien describe con gran precisión y de forma científica esta época tan trascendental para Cuba, cuyos ribetes nos ayudan a explicar la economía agrícola del siglo XIX puertorriqueño, que aunque no llego a los niveles logrados en Cuba, tenía muchas facetas en común.

libertos en San Juan, siglo XIX, San Juan, 1997; Baralt, Guillermo A.: *Esclavos rebeldes, conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico (1795-1873)*, Río Piedras, 1982; Pico, Fernando S.J.: *Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX*, Río Piedras, 1979; Curet, José: *Los amos hablan*, Río Piedras, 1986. También véase Schwartz, Stuart B.: "El trabajo y la vida de los esclavos en las plantaciones azucareras", *Revista del Centro de Investigaciones Históricas*, núm. 12-13, Universidad de Puerto Rico, 2001 (publicado originalmente en inglés como: *Slaves, Peasants and Rebels: Reconsidering Brazilian Slavery*, Urbana, Chicago, 1992; López Valdés, Rafael L.: *Africanos de Cuba*, San Juan, CEA, 2004; Vila Vilar, E. y Vila Vilar, L.: *Los abolicionistas españoles, siglo XIX*, Madrid, 1996.

28 Saco, José A.: *Historia de la esclavitud de la raza africana en el nuevo mundo*, 4 tomos, La Habana, 1938, 3ª. ed.

29 Moreno Fraginalls, Manuel: *El ingenio, complejo económico social cubano del azúcar*, 3 tomos, La Habana, 1978-79.

30 Cepero Bonilla, Raúl: *Azúcar y abolición*, La Habana, Instituto cubano del libro, 1971. También por Moreno Fraginalls: *Cuba/España, España/Cuba-Historia común*, presentación de Josep Fontana, Barcelona, 2002. Véase también: Piqueras, José A.: *Cuba, emporio y colonia (1878-1895), la disputa de un mercado interferido*, Madrid, 2003; y del mismo autor: *Azúcar y esclavitud en el final del trabajo forzado*, Madrid, 2002.

31 Véase la crítica que se hace a la posición de José Antonio Saco por su teoría de que la personalidad cubana debería excluir al afro-americano, que también lo inclina a favor de la inmigración de blancos y en contra de la independencia de la isla, ya que esto requería la abolición, en: Naranjo Orovio, Consuelo y González García, Armando: *Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX*, Madrid, Ediciones Doce Calles, 1996, págs. 12-18.

32 Tornero Tinajero, Pablo: *Crecimiento económico y transformaciones sociales, esclavos, hacendados y comerciantes en la Cuba colonial (1760-1840)*, Madrid, 1996. Del mismo autor: "Sociedad e ideología en la economía esclavista cubana", *Revista de Estudios Hispánicos y Culturales*, La Habana, núm. 10, julio-diciembre, 2000, y "Esclavitud y contradicciones económicas: el tratado de 1817 sobre abolición de la trata y sus repercusiones en la oligarquía cubana", *Revista La Rábida*, núm. 13, Huelva, 1994.

IV. FUENTES UTILIZADAS

Los archivos utilizados para este trabajo incluyen principalmente aquellos localizados en el territorio, comenzando con el Archivo General de Puerto Rico (AGPR). En éste se revisaron las leyes, decretos, reales órdenes, reglamentos, bandos y disposiciones de gobierno y justicia depositados en el fondo de legislación, reales cédulas y disposiciones reales de 1800 a 1861 (siglos XVIII y XIX). Además, fueron analizados los autos acordados del Real Acuerdo que se encuentran en este mismo archivo, recopilados desde 1832-1857 por el esfuerzo del magistrado Rafael García Goyena y suplementados hasta octubre de 1857, incluyendo los reglamentos de administración judicial vigentes en este período de tiempo.³³

También se consultó documentación en el Archivo del Obispado de San Juan, específicamente en los fondos sobre legislación, decretos y reales órdenes. En la Universidad de Puerto Rico se revisaron documentos en el Archivo del Centro de Investigaciones Históricas (CIH), microfilmados o copiados de los originales que se encuentran en los principales archivos de documentos indianos en España.

Aparte de las colecciones locales mencionadas, la investigación dependió de la revisión de los fondos principales del Archivo General de Indias (AGI) de Sevilla, centrada sobre todo en la documentación de carácter legal, institucional, judicial y de gobierno en las Secciones de Santo Domingo, Ultramar e Indiferente General para los siglos XVIII y XIX.

En muchos casos tuvimos que referirnos a fechas anteriores y posteriores al periodo que comprende la investigación, por ser esto necesario para completar el cuadro y obtener una visión más amplia de la materia presentada.

Además, revisamos documentación en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN), principalmente aquella información sobre las audiencias antillanas contenida en las series de Gobierno, Gracia y Justicia,

33 Se incluyen en este Suplemento: 1) el texto completo del Reglamento Provisional de Justicia de 1835, 2) el Reglamento para la Administración de Justicia de la Isla de Vieques, 3) Reglamento para los Juicios de Paz y Conciliación, para los Juicios Escritos de Menor cuantía, para los Verbales, y 4) la Cédula de 30 de enero de 1850 para la administración de Justicia de Puerto Rico. También se encuentra la Circular de 1855 para reglamentar el Ministerio Fiscal de la isla. Archivo General de Puerto Rico (AGPR); Autos acordados de la real audiencia de la Isla de Puerto Rico; Recopilación de Rafael García Goyena, Imprenta Márquez, San Juan, 1857, Suplemento, folios 1-178.

Hacienda y Fomento de Puerto Rico, incluso sobre asuntos tocantes a la economía, comercio e industria en la época estudiada. Para esto, sirvieron de mucho provecho los inventarios de cada serie publicados por el Archivo Histórico Nacional, Sección de Ultramar y editados por María Teresa de la Peña Marazuela de 1972 a 1987.³⁴

Para el tema específico de la esclavitud y su relación con el Derecho, ha sido muy importante poder contar con la recopilación de documentación sobre el proceso abolicionista en Puerto Rico preparada y publicada por el Centro de Investigaciones Históricas (CIH), de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, bajo la dirección de Arturo Morales Carrión en dos tomos (1974 y 1978).³⁵

Finalmente se utilizaron las colecciones de textos y artículos que se encuentran en las bibliotecas del Archivo General de Puerto Rico, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico. Las salas de referencia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC) de Sevilla también fueron consultadas.

V. PLAN DE EXPOSICIÓN

El estudio de la Audiencia de Puerto Rico y del Real Acuerdo que proponemos no sólo contempla el propósito de describir el derecho positivo y procesal vigente en el siglo XIX y las reglas existentes sobre el gobierno interno de la Audiencia, o la formación y el desarrollo de estas instituciones judiciales, sino que además intenta utilizar estos órganos y la labor de sus exponentes máximos como un instrumento para radiografiar y comparar el desarrollo de esta sociedad en una etapa inicial de su crecimiento.

34 Archivo Histórico Nacional, (AHN) Sección de Ultramar, Inventario de la Serie Gobierno de Puerto Rico (vol. I); Inventario de la Serie de Fomento de Puerto Rico (vol. II); Inventario de la Serie de Gracia Y Justicia (vol. III); Inventario de la Serie de Hacienda (vol. IV); y los Planos y Mapas de Puerto Rico (vol. V). Impreso por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972-1987.

35 *El proceso abolicionista en Puerto Rico: Documentos para su Estudio* (vol. I, *La Institución de la Esclavitud y su Crisis: 1823-1873*); (vol. 2: *Procesos y Efectos de la Abolición: 1866-1896*); *Recopilación de documentos sobre la esclavitud*, Centro de Investigaciones Históricas, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1974 (vol. I) y 1978 (vol. 2).

En este periodo tan crítico para la comunidad insular, cuando se cierran las audiencias e instituciones de Tierra Firme a la vez que se revive el interés en proteger, mantener y desarrollar la isla de Puerto Rico como un baluarte de la monarquía, aparece en la escena local la figura del oidor. Este oficial representa la presencia por primera vez en esta isla del poder real al nivel más alto, constituyendo este cambio institucional un símbolo de esperanza para algunos de los habitantes.

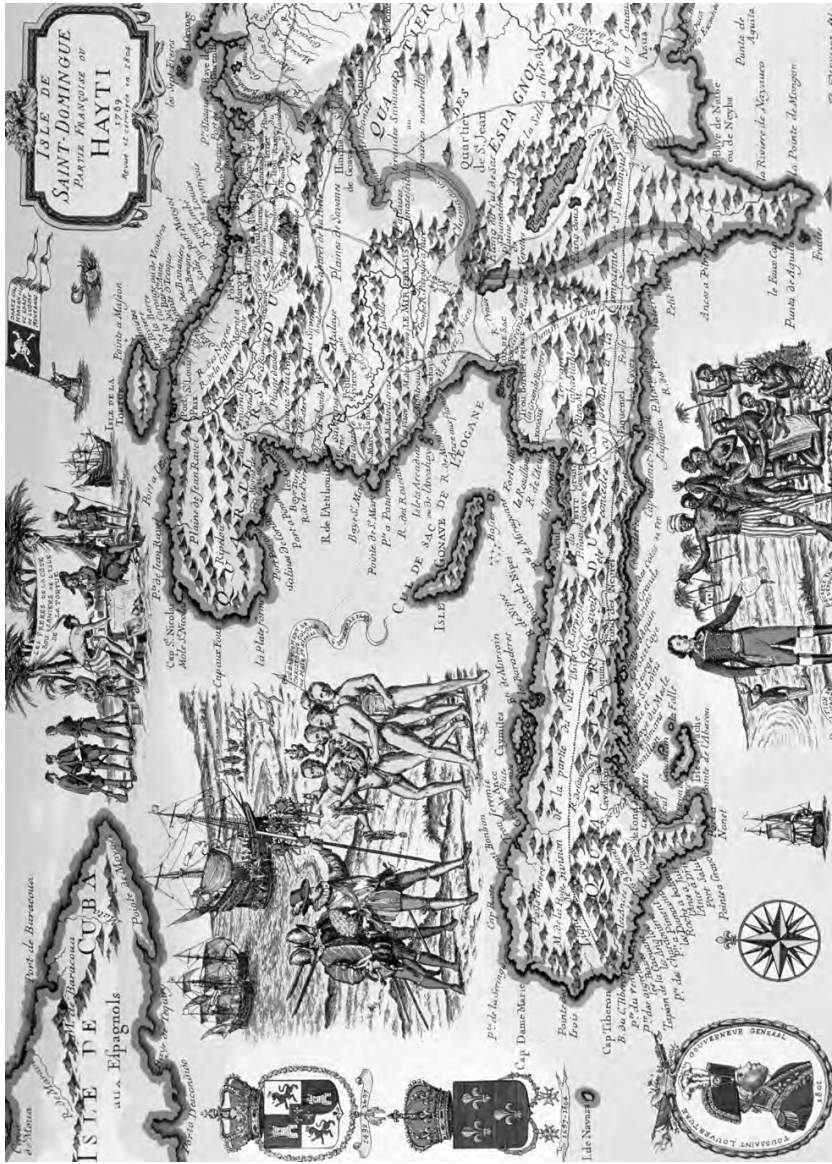
Como hemos dicho, la forma en que se desenvuelven esta institución y sus miembros en cuanto a la problemática social, económica y de seguridad de la isla ante el imperio en decadencia constituye el campo de acción de este trabajo. Por esto comenzamos en los dos primeros capítulos, que podrían llamarse la historia judicial antes de inaugurarse la Audiencia, bosquejando la institución en sus orígenes peninsulares y de Tierra Firme americana. Luego pasamos a comparar y analizar la institución cuando se trasplanta y desarrolla en las Antillas, finalmente discutiendo lo que transcurre cuando se hace necesario implementar estos órganos de justicia y gobierno en Puerto Rico.

Un tercer capítulo describe la ceremonia de inauguración y los primeros pasos que se dan en la formación de la institución judicial nativa, discutiéndose también las leyes y ordenanzas que le conciernen. Se sigue con un cuarto apartado que trata sobre los cambios en administración judicial que ocurren luego de inaugurarse la Audiencia y el impacto que los oidores tienen sobre los habitantes e instituciones de la isla. A la vez se analizan los conflictos que se producen entre oficiales locales, los demás poderes independientes o semi-autónomos y la justicia.

Las últimas partes del estudio se concentran en la participación de los oidores en el Acuerdo, en cuanto al comercio, agricultura, industria y la economía en general. El impacto que producen las reformas institucionales descritas sobre la problemática social y económica de los habitantes también se describe en esta sección e incluso se observa la relación entre la jurisdicción ordinaria y los demás foros especiales, en lo militar, religioso, hacendístico y comercial.

Los capítulos finales están dedicados al análisis de la justicia en relación a los sujetos y grupos que podrían considerarse como los más marginados de la sociedad: esclavos, jornaleros, reos, polizontes amancebados y cimarrones. En especial, aquí se examina el uso de los tribunales y del sistema de derecho por parte de estas clases desventajadas por razones eco-

nómicas y raciales, a la vez explicándose la participación de los oidores en la política que resultó en la criminalización de algunas conductas consideradas antisociales, como eran el amancebamiento y la vagancia. Finalmente, nos ocupamos del sistema esclavista y su relación con el sistema de derecho, incluso los distintos métodos utilizados para conseguir la libertad de los esclavos y la disponibilidad de los tribunales para dilucidar los diversos asuntos civiles y criminales, en los cuales los esclavos constituían parte indispensable de los litigios.



Mapa de la isla de Saint Domingue/Haití. Colección privada, Archives Charmet / The Bridgeman Art Library International.